

# Crisis y fragmentación del Estado en México y América Latina

*Eduardo Rodríguez González*

## **Resumen**

Este artículo refiere que las estrechas relaciones del capital financiero nacional e internacional con los sectores de la administración del Estado encargados de definir y aplicar la política económica de corte neoliberal, la vinculación de las Fuerzas Armadas latinoamericanas con las de Estados Unidos y la sujeción de los gobiernos democráticamente electos a las presiones populares, generan fuertes tensiones al interior del Estado al acentuar las presiones divergentes que provienen de diferentes sectores sociales y políticos.

## **Abstract**

The present article refers the relations between national and international financial capital with public administration, those sectors that defines the neoliberal economic politics, the link between Latinamerican and US Armed Forces and the submitted of democratic elected governments to the popular pressions, generated strong tensions in the State. at the moment that the pressions are deeper and belong from different social and political sectors.

El nivel de conflicto social en que culminó la onda expansiva del capitalismo de la posguerra, a fines de los años sesenta, puso en el centro del debate político un nuevo concepto, el de "gobernabilidad". El involucramiento del Estado en el desarrollo económico, y el acuerdo indiscutido en aquellos años acerca de que una de las funciones de la política estatal era la de asegurar un desarrollo social equilibrado, utilizando parte del gasto público para compensar los desequilibrios en el reparto de la riqueza –a lo que naturalmente tiende el modo capitalista de producción–, terminaron conduciendo al sistema político a generar efectos que no siempre parecían ser los más adecuados para asegurar la reproducción del orden capitalista.

En relación al problema de las cuentas públicas, se desarrollaba la necesidad de retirar crecientes cantidades de dinero del sistema productivo hacia el Estado para gastos cada vez más cuantiosos, necesarios para crear las condiciones de acumulación como infraestructura, investigación, etcétera; pero más oneroso resultaba también la necesidad de un gasto mayor por parte del Estado a fin de aplicarlo no directamente al desarrollo económico o al proceso de acumulación, sino a la creciente demanda de más servicios por parte de la sociedad, e incluso se realizaron gastos para atenuar los efectos negativos del desarrollo.

Al mismo tiempo, esa mayor cantidad de actividades estatales condujo a que los organismos públicos involucrados en estas tareas recibieran mayores presio-

nes desde el sector privado en atención a orientar las políticas públicas en favor de los distintos intereses existentes. Las funciones de legitimación del Estado se hacían así más complicadas, agudizándose las tensiones y contradicciones entre los órganos encargados de asegurar esa legitimidad –aparatos relacionados con las formas electivas y político-partidarias– y los diversos niveles de la administración relacionados con la toma de decisiones –secretarías y subsecretarías, entre otras– que debían responder a los requerimientos de acumulación del capital para los intereses privados.

Finalmente, la cuestión ideológica que implica el mencionado problema de la legitimidad también se tomaba cada vez más compleja. La presencia abiertamente visible del Estado en la mayoría de los problemas económicos y sociales no podía hacer más que promover mecanismos ideológicos que, aunque limitados a un reformismo populista o paternalista, tendían a legitimar y alentar el nivel de los reclamos de los diferentes sectores sociales. Reclamos cuyo incumplimiento convertía al Estado, o al gobierno, en el culpable directo a un grado que resulta imposible pensar para la etapa capitalista previa a los años treinta de carácter más liberal, en que los problemas económicos eran considerados esencialmente como eso, problemas económicos no atribuibles directamente a los Estados, cuyas obligaciones se limitaban, en lo fundamental, a las cuestiones de orden y seguridad.

Al mismo tiempo, el propio proceso de desarrollo social que acompañó a los años de crecimiento de la posguerra y el aumento de las expectativas de ascenso social alentaron las movilizaciones populares, mientras que los mayores niveles de educación, con el crecimiento explosivo de la matrícula universitaria a partir de los años cincuenta, contribuyeron a difundir valores culturales, los cuales más que apoyar el orden capitalista se contraponían a él. Es suficiente con observar los centros de donde, en la generalidad de los casos, surgieron los conflictos de fines de los sesenta, para después comprobar que, más allá de la esfera económico-privada de las relaciones directas de explotación de una clase sobre otra, surgieron de áreas relacionadas indirectamente con la producción y de áreas de carácter estatal (principalmente de las universidades, de sectores intelectuales o como en el caso de conflictos urbanos relacionados con servicios públicos). Incluso en los casos de participación del movimiento obrero, el conflicto surgía en buena parte de impulsos externos como los mencionados y bajo consignas no tanto de carácter salarial o económico en general, sino relacionadas con las estructuras de dominación y de carácter político.

A partir de ello, en los años setenta comienza a hablarse, desde los círculos conservadores, de cuestiones como la “explosión de las expectativas”, la “sobrecarga” de tareas por parte del Estado o la “politización” de conflictos que deberían limitarse al ámbito privado. Frente a esto, el remedio consistiría en

regresar a *establecer claramente los límites entre el sistema político-ideológico y el sistema económico*, tanto en la sociedad como respecto a las funciones del Estado. De manera tal que los problemas de funcionamiento, así como los conflictos surgidos alrededor de los intereses inmediatos que intervienen en la economía, no se trasladen directamente al ámbito político, pues ello dificulta las tareas de dirección y consenso por parte del Estado generando problemas de "gobernabilidad".<sup>1</sup>

El reforzamiento de estos límites pasa entonces por el progresivo abandono, por parte del Estado, de tareas vinculadas a la producción económica, o que hagan excesivamente visible la relación del Estado y el gobierno con la economía. La promoción de la tendencia privatizadora va en este sentido, pero también ideas como la de independizar los bancos centrales del gobierno, de manera tal que el manejo de la política monetaria –hoy generalmente de carácter recesivo, con efectos negativos sobre los sectores sociales más pobres– quede en manos del Banco Central y aparezca desligada de las decisiones de los gobernantes electos, sometidos a una presión, control y crítica más directas por parte del electorado, y cuya desaprobación afecta la legitimidad del sistema político en su conjunto. En el mismo sentido se encuentra la idea lanzada por el gobierno mexicano –pero que incluso encuentra adeptos en los partidos de oposición– de hacer, de la política neoliberal una "política de Estado" y no de gobierno, es decir, no sólo deja de estar sujeta a los cambios en los resultados electorales, sino permite desligar de responsabilidades al gobierno en turno de los estragos que aquélla genera en la sociedad, pues su permanencia proviene de un acuerdo "superior" que estaría más allá de las posibilidades de decisión del partido en el gobierno.

La concreción de todas estas medidas, a través de los programas económicos neoliberales, requería de transformaciones tales, que en el conjunto de Latinoamérica fue impulsada por regímenes abiertos o solapadamente dictatoriales. Se promovió una andanada de nuevos conceptos económicos: "modernización", "eficiencia", "competitividad", etcétera, con los que se intentaba justificar el autoritarismo político necesario para hacerlos plausibles.

Si en un primer momento no parecía haber duda de la idea de liquidar Estados que siempre se destacaron por los altísimos niveles de corrupción e ineficiencia, los estragos sociales a que llevaron estas nuevas políticas económicas hicieron cada vez más difícil que se legitimaran por sí mismas, por lo que los sectores dominantes vuelven nuevamente la vista hacia lo político para buscar allí la *relegitimación* de un orden social cada vez más insostenible. En otras palabras,

<sup>1</sup> Claus Offe, "Crises of crisis management: elements of a political crisis theory", en *Contradictions of the Welfare State*, Cambridge, The MIT Press, 1984, p. 53.

mientras en un principio la ilegitimidad de regímenes políticos represivos quiso ser compensada con promesas de paraísos económicos, hoy se pasa a una situación en la que los desastres económicos generados por el neoliberalismo vuelven a requerir de la legitimidad proveniente de la esfera política y se organiza el retorno a la democracia.

Sin embargo, parece contradictorio concebir que, precisamente políticas económicas decididamente antipopulares busquen asociarse con un retorno a regímenes democráticos en los que la base fundamental para ubicarse en los más altos puestos del Estado está constituida por el voto de la ciudadanía, lo que obligaría a los partidos y gobiernos en turno a responder a los reclamos de ésta, dirigidos cada vez más en contra de la política neoliberal.

Para superar esta tensión y asegurar la continuidad del modelo neoliberal se tomaron gran cantidad de recaudos por parte de las clases dominantes a fin de lograr amarrar a los futuros gobiernos electos y limitar su capacidad para imponer cambios radicales en la política económica. Por un lado, el aceleramiento forzado en la implementación de las nuevas políticas económicas para ganarle tiempo a la en algún momento inevitable democratización, generó condiciones propicias para que una vez llegada esta última etapa política se produjera la menor posibilidad de interferencias gubernamentales sobre lo económico. Así, al desregular y privatizar la mayor cantidad de mecanismos económicos, las posibilidades y los resortes de los gobiernos democráticos entrantes para incidir en las tendencias económicas serían mínimos.

Por otro lado, el condicionamiento de los futuros gobiernos electos se asegura atando el proyecto neoliberal a la negociación de pactos y compromisos de nivel internacional con la formación de los nuevos bloques económicos, pero también acentuando la integración hacia el exterior en los aspectos político y militar.

El tratamiento de esta nueva situación desde el punto de vista económico —la firma del TLC, los efectos de la crisis, los niveles crecientes de marginación social, la desarticulación del aparato productivo, etcétera— es abundante en la literatura actual, por lo que la intención de este trabajo es señalar algunos aspectos políticos del problema en el caso de México, dándose tendencias similares en el resto de Latinoamérica.

En primer lugar, debe señalarse algunos elementos teóricos que abordan la forma en que se manejan los regímenes con gobierno democrático de los países capitalistas, y que permiten pensar que no es del todo difícil la coexistencia entre la continuidad de las políticas económicas neoliberales y las renacientes democracias políticas.

En segundo lugar, cómo se da la ingerencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en los países subdesarrollados y en relación a ello, las crecientes presiones, en este caso, sobre el ejército mexicano para penetrar en sus estructuras de decisión estratégica y táctico-operativa e involucrarlo en la política

diseñada desde el norte para el conjunto de los ejércitos latinoamericanos. Así se aprovecha la situación de alta vulnerabilidad del Estado mexicano debido a la gravedad de las crisis (económica, social y política), que caracterizan el momento actual en el país y que aumentan la capacidad de condicionamiento de la política militar desde el exterior.

En ambos casos se verá que en realidad la tendencia es, más que resolver los problemas, acentuar las contradicciones políticas y, en particular, profundizar las *cuarteaduras* al interior del Estado mexicano.

### **El neocorporativismo**

En lo que se refiere a las características propias del funcionamiento de las democracias representativas en las sociedades capitalistas, los estudios señalan una serie de limitaciones y mecanismos de condicionamiento de la capacidad de maniobra de los gobiernos electos. Por un lado, se tiene la forma en que los empresarios inciden sobre la política gubernamental a través de la organización de toda una red de relaciones directas con los sectores claves de la administración del Estado, fundamentalmente con la "tecnocracia" de carácter no electivo donde se toman las decisiones concernientes al área económica en que actúa el empresario, quien busca esa vinculación, lo cual da lugar a lo que varios autores coinciden en denominar como "neocorporativismo".<sup>2</sup>

El carácter general de los abundantes estudios actuales sobre los procesos de democratización, orientados generalmente hacia las cuestiones de procedimientos electorales o a los sistemas de partido, y la carencia de estudios sobre las formas concretas en que se desempeñan los regímenes democráticos en relación al ejercicio del poder y la toma de decisiones, dificulta la comprensión de este tipo de cuestiones, por lo que se hace necesario apelar a trabajos que tratan los denominados "grupos de interés" o que analizan las formas de implementación de las "políticas públicas" para comprender mejor este tipo de sistema político.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Alfred Stepan y Philippe Schmitter, dos autores clásicos en el tema, lo definen como "grupo particular de políticas y arreglos institucionales que estructuran la representación de intereses" y que enlazan "los intereses organizados de la sociedad civil con las estructuras decisionales del Estado", Cfr. en Juan Manuel Ortega Riquelme, "Sobre el desarrollo de la teoría del neocorporativismo", en *Revista Mexicana de Sociología*, México, IIS-UNAM, año LIX, núm. 4, octubre-diciembre de 1997, p. 38.

<sup>3</sup> Como señala un trabajo sobre estos problemas, "La política no es sólo preocupación... por el mundo de la representación política a través del análisis exhaustivo de partidos o elecciones". La importancia de enfoques como los mencionados arriba reside en que permiten efectuar análisis en los que subyace la preocupación por la formación concreta de decisiones políticas y por su puesta en marcha. Charles Lindblom, *El proceso de elaboración de políticas públicas*, Madrid, Ministerio para las Administraciones Públicas, 1991, p. 5.

Esto no significa querer hacer de la introducción sobre la cuestión de la influencia de los grupos de interés en los análisis políticos, una teoría general aplicable por igual a todos los casos empíricos y considerarla como la clave del análisis sistemático de cualquier sistema político. En tal sentido, este enfoque acerca del comportamiento de los gobiernos democráticos y sus relaciones con los distintos sectores sociales debe ser tomado como una teoría de alcance intermedio y no con un carácter omniexplicativo.

Dentro del alcance limitado de esta teoría, J. LaPalombara señala varias categorías de análisis para evaluar las políticas gubernamentales en referencia al poder de influencia de los diferentes grupos de interés. Estas categorías se refieren a la capacidad de influencia variable que sobre el sector público tienen esos distintos grupos de acuerdo a:

1. El grado de organización y de conformación como grupo de interés de los diferentes sectores sociales. En el caso de Centro y Sudamérica, los efectos de las dictaduras que precedieron a las nuevas democracias al destruir las organizaciones de las clases populares determinan una clara superioridad por parte de los sectores capitalistas. En México, la tradicional organización desde el Estado de los diferentes sectores sociales cumple el mismo papel, por ejemplo, a través del abrumador "charrismo" sindical;

2. el acceso de los grupos a la información necesaria para la toma de decisiones por parte del gobierno. También en este caso, la información que poseen las organizaciones empresariales y financieras es imprescindible para la toma de decisiones en materia económica aplicadas a economías de mercado controladas por el capital privado;

3. a ello se agregan otros problemas como el hecho de que los funcionarios encargados de la toma de decisiones tienden a favorecer a los grupos de interés que muestran origen de clase o formas de educación similares a las suyas;

4. es de gran importancia actualmente considerar el efecto de la expansión de lo que se conoce como "legislación delegada", según la cual proliferan las agencias estatales encargadas de distintos aspectos de la actividad económica que tienen además capacidad de diseñar políticas públicas en sus respectivas áreas de acción, lo que suelen hacer en estrecha relación con los intereses privados correspondientes, y

5. el poder de los diferentes grupos de interés depende también de: a) los grupos que la administración pública toma como referencia al momento de tomar decisiones, y b) el carácter de la estructura y de los procesos al interior de la burocracia.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Joseph LaPalombara, "The utility and limitations of interest group theory in non-american field situations", en *The Journal of Politics*, Gainesville, University of Florida, vol. 2, núm. 1, febrero de 1960.

En referencia al caso italiano, por ejemplo, LaPalombara corrobora la exactitud de estos señalamientos de carácter teórico, dado que, haciendo un seguimiento de casos de legislación en los que intervienen las posiciones encontradas de diferentes grupos de interés de la sociedad italiana, la organización industrial más poderosa, la Confindustria, aparece derrotada en la mayoría de los debates parlamentarios más importantes. Es sin embargo en la actividad cotidiana de toma de decisiones que se definen las grandes líneas de la política económica, y no en casos espectaculares donde los funcionarios públicos deben ceñirse a los intereses de esa organización por motivos que resultan de las características de la estructura económica y política de las sociedades capitalistas. Por otra parte, LaPalombara señala también que las demandas de los grupos de interés suelen presentarse ante las agencias públicas de manera "inflada", y lo que aparenta ser una derrota en relación a la totalidad de lo exigido, en realidad está ocultando la conquista de concesiones en los aspectos fundamentales en juego.

En otro orden, como pasó en la generalidad de los países capitalistas en los años de posguerra, la expansión del intervencionismo estatal en la economía, la extensión del sector público en esa misma área y la generalización de la planeación a largo plazo, expandieron el área de la burocracia con capacidad de toma de decisiones, a través de la ya señalada ampliación de la "legislación delegada", dando como resultado la acentuación de las formas de concertación directa entre burocracia pública y negocios privados. Se generó así la tendencia a que "a mayor capacidad legislativa de la burocracia, más intensamente los grupos de interés se volcaron hacia ella en busca de protección".<sup>5</sup>

Según lo afirman funcionarios de la administración pública francesa, ciertas oficinas administrativas

se identifican frecuentemente con las demandas de los grupos de interés a tal grado que dan el sello de su aprobación a demandas ni atenuadas ni evaluadas, convirtiéndose a través de ello en la prolongación gubernamental de las organizaciones privadas. (De tal forma) los intereses organizados se están de hecho apoderando del poder de decisión administrativo. El derecho a ser consultado se ha tomado en la práctica en derecho de los grupos privados a efectuar decisiones autoritarias desde el momento en que nadie se atreve a ignorar las advertencias de los poderosos intereses.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Henry Ehrmann, "French Bureaucracy and Organized Interests", en *Administrative Science Quarterly*, Ithaca, Cornell University, vol. 5, núm. 4, marzo de 1961, pp. 535 y 536.

<sup>6</sup> *Ibid.*, pp. 539 y 542.

Este contacto entre grupos de negocios y administración pública no implica una forma de manipulación unidireccional de los primeros hacia la segunda, sino una mutua influencia que permite establecer un *método de toma de decisiones concertadas entre Estado y capitalistas*.

El papel más intrascendente en estos procesos de negociación y toma de decisiones, según coinciden varios autores, es el jugado por los debates parlamentarios. Como se señala para el caso de Estados Unidos: "El papel del Congreso parece ampliamente el de ratificar los acuerdos surgidos de la burocracia y de los agentes de clase representados en ella".<sup>7</sup> Henry Ehrmann agrega que si tal situación llega a ser la regla, entonces

... el «progresivo pluralismo» del gobierno y la sociedad norteamericanos se deteriorará forzosamente y por último se destruirá, hasta no dejar nada de un verdadero sistema pluralista... la socavación de la soberanía, la colonización de la maquinaria gubernamental por gigantescas organizaciones privadas, han alcanzado ya tales proporciones que un neofeudalismo puede atreverse a hacer caso omiso de las reglas del juego democrático sin temor al castigo.<sup>8</sup>

De lo anterior se observa que el problema, además del hecho en sí, de restar capacidad de decisión a los partidos elegidos por voto popular, tiene que ver con la tendencia a que tal forma de toma de decisiones concertada entre ciertos aparatos de la administración —encargados de la política económica— y los grupos de interés, adquiere un carácter secreto, escapando finalmente a la fiscalización de la ciudadanía; el poder sigue estando oculto.

De esta tendencia en las democracias actuales se ocupa Norberto Bobbio, quien afirma que en realidad una de las "promesas incumplidas" de la democracia sigue siendo la de terminar con esta forma de ejercicio del poder fuera de la visibilidad pública.<sup>9</sup> Claus Offe, por su lado, señala en el mismo sentido que

... la localización institucional en que toman forma las políticas estatales se desvía de aquellas instituciones que la teoría democrática asigna para esas funciones... Muy a menudo, las decisiones en los asuntos políticos claves emergen de un alto *proceso informal de negociación entre los*

<sup>7</sup> Theodore J. Lowi, "American Business, Public Policy, Case-studies and Political Theory", en *World Politics*, Baltimore/Maryland, John Hopkins University Press, vol. 16, núm. 4, julio de 1964, p. 705.

<sup>8</sup> Henry Ehrmann, "Cambios funcionales en las instituciones democráticas en los Estados Unidos", en Henry Ehrmann (comp.), *Los cambios sociales y la democracia*, México, Ed. Roble, 1967, pp. 86-87.

<sup>9</sup> Norberto Bobbio, *El futuro de la democracia*, México, FCE, 1986, p. 94.

*representantes de los grupos estratégicos dentro del sector público y privado.*<sup>10</sup>

Si, como afirmó Alexis de Tocqueville, cuando el ejercicio del poder no se hace a la vista del público el concepto de representación carece de todo sentido, habrá que plantearse este problema si se pretende llegar a una democracia que adquiera un sentido efectivo en lo que se refiere a la relación entre funcionarios públicos y electorado. En esta línea Guillermo O'Donnell habla de las nuevas democracias latinoamericanas como ejemplo de "*democracia delegativa y no representativa*", en tanto esta "primera transición" que hoy se está llevando a cabo —consistente en restablecer los mecanismos de elección popular de los funcionarios de gobierno— implica la delegación legítima de la soberanía popular en aquellos que los llevaron con su voto al gobierno, pero no todavía una real representación de los intereses de las mayorías. Frente a la debilidad de las instancias verdaderamente democráticas de toma de decisiones, "Otras instituciones no formalizadas, pero fuertemente actuantes, especialmente el clientelismo, el patrimonialismo y, ciertamente, la corrupción, toman el lugar de aquéllas, junto con varios patrones de acceso directo y sumamente disgregados del proceso de toma de decisión e implementación de políticas públicas".<sup>11</sup>

Así, mientras a través del acceso directo a los sectores clave del Estado, la burguesía pasa por encima de las no muy eficaces vías representativas que la institucionalidad democrática asigna como medio de contacto entre los diversos sectores de la sociedad civil y el Estado, las clases populares deben apelar a los mecanismos de representación a través del voto, que implican una serie de mediaciones entre las necesidades y la presión de esas clases y, en el otro extremo, los centros de toma de decisiones en el Estado.

### **Los "mecanismos estructurales" de condicionamiento de la política gubernamental**

Además de todos estos mecanismos de acción conciente de la clase económicamente dominante para orientar el comportamiento del gobierno y del Estado en favor de sus intereses, existen los que Fred Block denomina "mecanismos estructurales principales", consistentes en

<sup>10</sup> Claus Offe, "The separation of form and content in liberal democracy", en *Contradictions of the Welfare State*, op. cit., pp. 166 y 167.

<sup>11</sup> Guillermo O'Donnell, "¿Democracia delegativa?", en Romeo Gramone (comp.), *Instituciones políticas y sociedad*, Lima, IEL, 1995, p. 228.

... constricciones estructurales que operan para reducir la probabilidad de que los dirigentes estatales actúen contra los intereses generales de los capitalistas ...[y que promueven] la tendencia de los dirigentes estatales a seguir políticas orientadas hacia los intereses generales del capital.<sup>12</sup>

Lo que resulta del "poder de veto sobre las políticas estatales" que tiene la clase capitalista dado que, en primer lugar, los ingresos del Estado dependen del mantenimiento de un nivel razonable de la actividad económica, controlada por aquella clase y depende de su disposición a mantener un nivel aceptable de inversiones, para lo cual la política gubernamental debe preocuparse por mantener la "confianza del capital" mediante medidas que satisfagan sus intereses. En segundo lugar, una merma en el nivel de inversiones de los capitalistas provoca dificultades económicas que repercuten en el nivel de apoyo popular al gobierno, cuyo grado de consenso depende así del manejo que la clase capitalista haga de la economía.

Dado que la economía capitalista funciona fundamentalmente –y se busca que cada vez lo sea más– con base en las inversiones de los capitales privados, cualquier partido que se encuentre en el gobierno debe crear las condiciones que alienten esa "confianza del capital", como por ejemplo, la tasa de ganancia requerida para efectuar el volumen de inversiones necesario para impedir que la economía caiga en un estado de recesión con, por ejemplo, el aumento del desempleo y demás efectos que desembocan en la disminución del apoyo del electorado al gobierno.

Pero, precisamente, estos mecanismos de presión sobre el gobierno funcionan con mayor rudeza cuanto más juego se deja a las "libres" fuerzas del mercado, en el que prevalece, por supuesto, la acción de los grandes capitalistas. Y es a través del funcionamiento irrestricto del mercado y de su control sobre el mismo que la burguesía puede traducir en toda su magnitud el poder económico en poder político impuesto no sólo sobre las restantes clases sino sobre el propio gobierno.

Ante cualquier medida de intenciones reformistas o de intervención del Estado en el control u orientación de la actividad económica, el gobierno debe enfrentarse al posible descenso en el nivel de la inversión privada, si no al boicot directo a la economía a través de la fuga de capitales, la desviación del capital desde la producción hacia la actividad especulativa o la generación de olas inflacionarias.

<sup>12</sup> Fred Block, "The ruling class does not rules: notes on the marxist theory of the state", en *Socialist Revolution*, San Francisco, vol. 7, núm. 3, mayo-junio de 1977, pp. 14 y ss.

Si al reforzamiento de los mecanismos de mercado se agrega la suscripción de acuerdos económicos con el exterior incorporándose a los nuevos bloques multinacionales –facilitando la libertad de movimientos y la capacidad de presión de las empresas transnacionales al interior de las naciones más débiles y obligando a formular la política económica a largo plazo atada cada vez más a los intereses globales incluidos en los acuerdos en lugar de los intereses nacionales–, se hace aún más difícil, para los sucesivos gobiernos electos, implementar modificaciones radicales en la economía sin que ello conlleve a un enfrentamiento con los poderosos intereses externos e internos asociados con aquellos que están detrás de la firma de los acuerdos y vinculados, de diversas maneras, con sectores clave de la burocracia estatal.

Si todo esto sucede incluso en las democracias consolidadas de los países desarrollados en los que se logró cierto equilibrio social –que permite una relativa nivelación entre los reclamos de los grupos económicos y las necesidades de las mayorías sociales–, es fácil comprender la libertad de maniobra que puede tener un gobierno electo en países como los latinoamericanos, cuyos Estados están sometidos a las presiones de fuertes intereses externos e internos asociados a aquellos. Más aún cuando precisamente la tendencia a responder a los reclamos sociales mediante la represión, más que la integración, reproduce o amplifica un desequilibrio político que en definitiva ata todavía más a Estados cuya sobrevivencia, dada su falta de legitimidad al interior, depende en grado extremo del apoyo de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, o el gobierno estadounidense.

En efecto, la combinación de democracia y economía de mercado incontrolada en el caso de México, con la creciente desregulación y privatización, el carácter “estatal” que pretende dársele a la política económica, la mayor “autonomía” del Banco Central, más la firma de los pactos internacionales como parte de la política de globalización, exacerba al máximo los mecanismos a través de los cuales se desnaturaliza el carácter representativo de los gobiernos democráticos electos, condicionando y limitando su capacidad de decisión. Mientras las grandes decisiones en materia económica tienden a quedar fuera de la capacidad de determinación de los gobiernos elegidos por el voto popular, la única función a realizar es la de hacerse cargo de los problemas que hoy acosan a la sociedad y que se agravan e intensifican: la marginación, el desempleo, la inseguridad, etcétera. Así vemos que a pesar del avance electoral de los partidos de oposición, éstos fracasan en sus intentos de modificar las grandes líneas de la política económica –lo que también se observa en todas las nuevas democracias de Centro y Sudamérica. Cuando los partidos de oposición logran diferenciarse de los partidos que abiertamente promueven el neoliberalismo esto se hace fundamentalmente a través de actos de carácter político-ideológico. Se

concreta así la recomendación mencionada más arriba e impulsada por la derecha para superar la crisis de "sobrepolitización" en que había caído el Estado intervencionista y populista: *separar claramente las acciones y los aparatos político-ideológicos relacionados con las formas democráticas de legitimación, de los aparatos y las decisiones fundamentales en materia de definición de la política estatal, en este caso la económica*. Para eliminar las contradicciones que esto implica, todo se organiza bajo "el seguro" que supone el nuevo papel policial de las fuerzas armadas.

### **La creciente influencia militar de Estados Unidos**

Si la separación entre los centros del aparato estatal en que se concentra el poder, en estrecha asociación con los intereses privados por un lado, y las instituciones democráticas por otro, se observa en el campo civil y en relación al manejo de la economía, otra profunda escisión al interior del Estado se produce en relación al área militar, lo cual por otra parte es agravado por la fuerte influencia de las fuerzas armadas de Estados Unidos en los países de Latinoamérica.

En el caso de México, hoy es recurrente la aparición de estudios que señalan el creciente acercamiento de las fuerzas armadas locales con las de Estados Unidos con la presentación de documentos del gobierno norteamericano en que se señala la importancia de fomentar ese acercamiento y de las óptimas condiciones que para ello presenta el estado actual de las relaciones entre ambos países. Lo anterior en buena parte debido a la profunda crisis que afecta a la economía y la política mexicanas, lo que aumenta el grado de vulnerabilidad frente a las presiones externas.

En estos trabajos se señala, por ejemplo, que actualmente "México, más que ninguna otra nación en el mundo... afecta directamente el futuro de la seguridad política y económica de Estados Unidos".<sup>13</sup> Ante lo cual "el gobierno del presidente Bill Clinton ha identificado la expansión de los vínculos militares entre Estados Unidos y México como una prioridad clave de la política".<sup>14</sup>

Una de las principales vías a través de las cuales las fuerzas armadas de Estados Unidos se vinculan a las de los restantes países es el establecimiento de acuerdos mediante los cuales este país ofrece entrenamiento y equipamiento de material bélico, como por ejemplo los conocidos Programas de Asistencia Militar (PAM), programas de capacitación que han sido implementados por el gobierno de Estados Unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando este país se

<sup>13</sup> Carlos Fazio, *El tercer vínculo*, México, Joaquín Mortiz, 1996, p. 46.

<sup>14</sup> *La Jornada*, México, 22 de febrero de 1997, p. 6.

convirtió en la potencia indiscutiblemente hegemónica en Occidente, desde el punto de vista militar. Entre la guerra y el año de 1971, fueron entrenados por Estados Unidos más de 320 mil oficiales y soldados extranjeros.

Sin embargo, México fue uno de los países que más se resistió a este tipo de contactos; a través de ellos, en algunos países como Brasil fueron entrenados 6 mil 296 militares en bases de Estados Unidos dentro o fuera de su territorio, entre los años de 1950 y 1969. De Perú fueron entrenados 4 mil 723 militares, de Colombia 4 mil 353, de Ecuador 4 mil 44, y de Chile 3 mil 975. En México, sólo 570 militares recibieron estos cursos.<sup>15</sup> Por otra parte, Carlos Fazio señala que hasta 1996 "Estados Unidos no tenía acceso a las estructuras de decisión táctica-operativa y estratégica de las fuerzas armadas mexicanas, la única institución de América Latina, junto con la de Cuba, que no ha sido penetrada directamente por el Pentágono".<sup>16</sup>

Luego de esos años en que fue más complicada la penetración en el ejército mexicano respecto a los de los restantes países latinoamericanos, hoy la situación ha dado un viraje fundamental y, además de otras formas de contacto, ya se puede señalar, en materia de entrenamiento que, "En América Latina, México es el beneficiario mayor de los fondos de capacitación otorgados por el programa Educación y Capacitación Militar Internacional del Departamento de Estado".<sup>17</sup>

Los objetivos de estos programas van mucho más allá de los dos explícitamente señalados —entrenamiento y abastecimiento de material bélico—, y consisten fundamentalmente en estrechar relaciones directas con los mandos de los ejércitos de países tanto desarrollados como del Tercer Mundo, para incidir en la política militar y en el orden de la política general de esos países. Como señala una investigación sobre este tipo de programas

... existe una brecha entre los objetivos propuestos públicamente y los propósitos reales del Programa de Ayuda Militar... cualquier ventaja a largo plazo para los Estados Unidos proveniente de la inversión en entrenamiento de los PAM es en gran medida determinada por la magnitud y el carácter de las comunicaciones con los oficiales extranjeros *después de su partida* de las instalaciones de entrenamiento.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Miles Wolpin, *Military Aid and Counterrevolution in the Third World*, Massachussets, Lexington Books, 1992, p. 96.

<sup>16</sup> Carlos Fazio, *op. cit.*, p. 179.

<sup>17</sup> *La Jornada*, *Ibid.*

<sup>18</sup> Miles Wolpin, *op. cit.*, p. 95.

Para ello, mediante el adoctrinamiento ideológico impartido a los militares entrenados, la generación de "Intensos temores y de antipatía por grupos vagamente definidos como 'subversivos' o 'agitadores' son más que suficientes para crear una comunidad de intereses con sus mentores norteamericanos".<sup>19</sup> También se apela a acciones como intercambio de correspondencia, luego del retorno de los militares entrenados a su país de origen, envío de material impreso, así como proporcionar un segundo entrenamiento a los militares que ya lo recibieron, etcétera.

Otra vía para intervenir en los procesos políticos de los países firmantes de estos acuerdos es mediante la presencia de las misiones militares norteamericanas en el territorio de aquellos, ya sea como agregados militares en las embajadas o en los llamados Grupos Militares (MILGRPs, por sus siglas en inglés) o los Grupos Militares Asesores y de Asistencia (MAAGs). Ya a fines de los sesenta "había aproximadamente 10 mil militares norteamericanos para entrenamiento o asesores establecidos en ochenta y ocho países subdesarrollados que estaban en diario contacto con los respectivos ochenta y ocho estados mayores militares".<sup>20</sup>

Las actividades de estos militares son más amplias que las señaladas como objetivo explícito. Según un militar norteamericano "Los oficiales militares que componen estos grupos están más relacionados con las operaciones de los programas de entrenamiento, pero tenemos muchos ojos observando en materia política y económica en embajadas, comandos unificados, Departamento de Defensa, de Estado y AID".<sup>21</sup>

Tareas que se complementan con las acciones encubiertas que ejecuta la Agencia Central de Inteligencia (CIA), pues la separación entre trabajo de entrenamiento y de inteligencia es salvada por el hecho de que la supervisión del entrenamiento y el asesoramiento en materia militar implican, en sí mismos, la obtención de datos de inteligencia acerca de las actitudes políticas de los militares entrenados y de la situación político-militar del país huésped. En definitiva, "... la CIA usa a los Grupos Militares como cobertura de sus actividades..., estas dos categorías de actividad sólo pueden ser separadas en teoría, la labor de inteligencia y la acción encubierta interactúan y se superponen".<sup>22</sup>

Y estas acciones encubiertas no sólo lo son respecto al público en general sino, en muchos casos, respecto de los propios gobiernos constitucionales de los países huéspedes, como en los tradicionales casos en que están enfocadas a

<sup>19</sup> *Id.*

<sup>20</sup> *Ibid.*, p. 96.

<sup>21</sup> *Ibid.*, p. 102.

<sup>22</sup> *Id.*

la organización de golpes militares en acción conjunta con los militares locales. Aunque en la actualidad, el cambio de política norteamericana, sustituyendo los clásicos golpes por las técnicas más solapadas de organización de Guerra de Baja Intensidad (GBI) contra los grupos considerados como "subversivos" del orden establecido, implican otro tipo de acciones como la promoción de "grupos paramilitares, formas de acción política, propagandística y otras operaciones encubiertas para impulsar la política de Estados Unidos". En general, "... la acción encubierta es utilizada para incidir en el balance de poder interno... Y es precisamente aquí que el adoctrinamiento de los PAM puede jugar un papel vital en crear o reforzar sentimientos antirradicales".<sup>23</sup>

Pero estas acciones encubiertas no sólo pueden escapar al control de los gobiernos legítimos de los países huéspedes sino, incluso, al sector civil del propio gobierno de Estados Unidos, dada la tendencia actual a que el manejo de la política exterior pase cada vez más del Departamento de Estado al Pentágono:

El eclipse de la tradicional primacía del Departamento de Estado para manipular el alineamiento político interno de los países más débiles es un fenómeno de la segunda posguerra mundial y es paralela a su declinación en su antiguamente exclusivo control de la diplomacia norteamericana... parte de su autoridad ha sido delegada al Pentágono... hay poca evidencia de algún control del Departamento de Estado sobre las iniciativas del Pentágono...<sup>24</sup>

De la misma forma que en algunos casos no ejerce ningún tipo de control operacional sobre los PAM, ni tampoco las embajadas.

Los MAAGs se reportan directamente a través de la cadena de mandos con el Jefe de Estado Mayor. Este desplazamiento del sector civil de la política exterior de los Estados Unidos... es totalmente consonante con uno de los objetivos centrales de la ayuda militar en los países menos desarrollados: introducir oficiales [norte]americanos en los procesos políticos internos de los gobiernos huéspedes.<sup>25</sup>

Estas formas de acción son las que está impulsando el gobierno de Estados Unidos frente al ejército mexicano. Utilizando hoy el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, como anteriormente lo era el comunismo, Estados Unidos logró

<sup>23</sup> *Ibid.*, p. 105.

<sup>24</sup> *Ibid.*, pp. 101 y ss.

<sup>25</sup> *Id.*

conformar, desde 1996, organismos de cooperación militar bilateral, como "caballo de Troya", para comenzar a introducirse en los asuntos militares estratégicos de México, apareciendo noticias como "Negocian plan antinarco ejércitos de México y EU", según el cual "... oficiales de ambos ejércitos estaban discutiendo los términos de un entrenamiento conjunto antinarcóticos a los militares mexicanos y la posibilidad de establecer un intercambio de inteligencia básica".<sup>26</sup>

De acuerdo con lo señalado por Miles Wolpin, también se considera como fundamental el estrechamiento de vínculos personales. William Perry, secretario de defensa norteamericano, a partir de estos nuevos contactos y luego de lograr varias entrevistas con su homólogo mexicano, escribió que

Las relaciones entre militares se fortalecen en la medida que sus líderes construyen vínculos de trabajo: las fuerzas armadas [de EU y México] han comenzado un diálogo entre estados mayores, tropas de paracaidistas han saltado de las respectivas aeronaves, oficiales de Estados Unidos enseñan inglés en institutos militares mexicanos, mientras que oficiales mexicanos enseñan español en instalaciones de Estados Unidos.<sup>27</sup>

Precisamente, al informarse sobre el aumento de medio a un millón de dólares en el monto asignado al mencionado Programa Internacional de Educación y Capacitación Militar de Estados Unidos para México para 1997, se señala que:

Esa capacitación y educación deben promover una voluntad mayor para cooperar con los contrapartes de Estados Unidos, y establecer procedimientos y suposiciones operacionales más comunes... Un elemento importante dentro de la estrategia será alentar contactos de alto nivel de la defensa civil entre México y Estados Unidos y contactos directos de militar a militar, así como también una mayor cooperación de México en actividades de defensa dentro del hemisferio.<sup>28</sup>

El objetivo fundamental de este acercamiento es involucrar a las fuerzas armadas mexicanas en la estrategia que actualmente impulsa Estados Unidos para los ejércitos de Latinoamérica, la de sustituir la estrategia de seguridad nacional por una de "estabilidad nacional", que buscaría impedir acciones

<sup>26</sup> Carlos Fazio, *op. cit.*, 182.

<sup>27</sup> *Ibid.*, p. 186.

<sup>28</sup> *La Jornada*, 22 de febrero de 1997.

abiertamente golpistas que atenten contra los nuevos gobiernos democráticos con los que se busca legitimar las políticas neoliberales. Pero dadas las brutales consecuencias que éstas tienen sobre la sociedad, les cabría a los ejércitos locales adquirir "... funciones de fuerzas de disuasión internas (policiales) ante las previsibles protestas populares originadas por la aplicación de las políticas neoliberales".<sup>29</sup>

Medidas recientes tomadas por el gobierno mexicano –como la militarización de los mandos policiales de distintas corporaciones, como Seguridad Pública, Judicial y algunas estatales, y la promulgación de la Ley por la que se constituye el Sistema Nacional de Seguridad Pública–, se ajustan a esos lineamientos.

Por otra parte, además de este tipo de programas de entrenamiento existen otras formas de vinculación con otros organismos norteamericanos de seguridad. Según informa el periódico *The New York Times* del 29 de diciembre de 1997, desde hace tres años que la CIA proporciona apoyo antinarco al Ejército Mexicano a través de

capacitación, equipamiento y apoyo operacional para una sección especial de la inteligencia militar mexicana conocida como Centro de Investigaciones Antinarcóticos (CIAN)... El programa de la CIA se lleva a cabo con un grupo seleccionado de entre casi 2 mil soldados mexicanos que han recibido capacitación antinarcóticos ofrecida por el Pentágono desde 1996. El entrenamiento incluye cursos en inteligencia, capacitación de los pilotos de helicópteros y habilidades de fuerzas especiales, y además tiene el propósito de asistir en el establecimiento de los llamados Grupos Aeromóviles de las Fuerzas Especiales.<sup>30</sup>

Y aunque se señala que todo ello está destinado a la lucha contra el narcotráfico,

... el *Times* sostuvo que tanto fuentes oficiales estadounidenses como mexicanas reconocieron que no hay ninguna limitación para el despliegue de las unidades de fuerzas especiales capacitadas en Estados Unidos 'contra insurgentes de izquierda en estados como Guerrero y Chiapas'.<sup>31</sup>

Esta progresiva integración de México y Estados Unidos en el área militar da lugar a lo que el mismo William Perry señaló como el "tercer vínculo", entre

<sup>29</sup> Carlos Fazio, *op. cit.*, p. 175.

<sup>30</sup> *La Jornada*, 22 de febrero de 1997.

<sup>31</sup> *Id.*

ambas naciones, "pues ya se tienen dos fuertes bases en nuestros lazos políticos y económicos". Ello se estructura a nivel de las fuerzas armadas mediante acuerdos a largo plazo en los que lo explícito se mezcla con lo secreto y, que por lo tanto, también escapan a la capacidad de decisión de los gobiernos electos.

De esta forma, si en los señalamientos mencionados más arriba, acerca de las limitaciones y condicionamientos que en los regímenes democrático-capitalistas tienen los gobiernos electos a la hora de tomar decisiones en materia de política económica, se mostraba la creciente división dentro del Estado entre los funcionarios democráticamente electos y los órganos "permanentes" de la burocracia relacionados directamente con los intereses privados correspondientes a sus áreas de decisión, el aumento de la injerencia militar norteamericana y el estrechamiento de relaciones directas con las fuerzas armadas locales constituye otro factor que atará las manos a cualquier partido que llegue al gobierno a través de las urnas, acentuando la división entre éste y los aparatos militares. Mucho más aún en caso de llegarse a los extremos señalados de posibilidad de golpes de Estado técnicos que seguirían conviviendo con una fachada de poder civil.

En el caso de la ayuda militar a México, también se señala que

el acuerdo "marco" para concretar aspectos de la cooperación militar bilateral y la "donación" de un número indeterminado de helicópteros Huey por parte del gobierno de Estados Unidos a México [fueron] obtenidos al margen de la sección 505 del Acta de Asistencia al Exterior, es decir, sin que queden sujetos al monitoreo del uso final por parte del Departamento de Estado.<sup>32</sup>

Puede decirse que en este caso, México, al estrechar relaciones con Estados Unidos, corre el riesgo de adoptar lo que son características tradicionales de la política de ese país. Como señala Alan Wolfe

... hoy en día hay dos gobiernos en Estados Unidos. Uno es visible. El otro es invisible. El primero es el gobierno acerca del cual los ciudadanos leen en los periódicos y los niños estudian en los libros de civismo. El segundo es la maquinaria entretejida y oculta que llevó a cabo la política de Estados Unidos durante la guerra fría.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Carlos Fazio, *op. cit.*, p. 184.

<sup>33</sup> Alan Wolfe, *Los límites de la legitimidad*, México, Siglo XXI, 1980, p. 201.

Existen muchos otros ejemplos, como los de las intervenciones de los aparatos militares y de inteligencia norteamericanos en los golpes de Estado en Latinoamérica, o el llamado "Irangate" para financiar en forma ilícita a la "contra" nicaragüense, todo ello muchas veces fuera del control de organismos de fiscalización del gobierno civil sobre las actividades de los aparatos militares y de inteligencia.

Lo anterior no hace más que acentuar el reforzamiento de lo que en la sección anterior, en relación fundamentalmente a las decisiones económicas, Bobbio y Offe denominaban *gobierno oculto*, superpuesto a las formas democráticas, dando lugar así a ese *Estado paralelo* que señala Wolfe, ahora desde el punto de vista militar. Mostrando así que las modalidades represivas implementadas bajo supervisión norteamericana —como las técnicas de guerra de baja intensidad—, constituyen en realidad formas de "guerra paralela", como lo señala Carlos Fazio.<sup>34</sup> A ello no son ajenos los comentarios periodísticos acerca de la masacre en Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, en los que se califica a las fuerzas que la perpetraron como un "aparato paralelo" o una "red criminal paralela", en tanto corresponden a ese Estado que hoy se hace cada vez más represivo, actuando fuera de su propia legalidad, mientras se cubre con una escenografía democrática.

Esta superposición democrática, paralela al reforzamiento de las acciones represivas, sigue la línea de la nueva estrategia política que desde Estados Unidos se busca imponer en Latinoamérica. Luego de los desastres en que terminaron las pasadas dictaduras militares y del desgaste que sufrieron con ello las fuerzas armadas en todo el continente, ahora es a través de los procesos de democratización, o de transición a la democracia, que se busca legitimar las nuevas realidades del neoliberalismo latinoamericano. En las condiciones críticas que hoy padecen las mayorías empobrecidas, se reconoce que

... sólo un sistema democrático es capaz de procesar las presiones y alcanzar los acuerdos para la instrumentación de políticas económicas no siempre muy populares... La construcción de consensos sociales por la vía más amplia posible aparece, por lo tanto, como fundamental para lograr consolidar el modelo económico.<sup>35</sup>

En otras palabras, el objetivo es

<sup>34</sup> Carlos Fazio, *op. cit.*, p. 55.

<sup>35</sup> Emilio Zebadúa, "Globalización y gobernabilidad", en *La Jornada Semanal*, México, 14 de diciembre de 1997, p. 16.

implantar en la gran mayoría de los países de América Latina un mismo modelo político "democrático" y otro de carácter económico sustentado en la economía de mercado con apertura comercial internacional y con fuertes restricciones al papel rector que había venido desempeñando el Estado.<sup>36</sup>

## Conclusiones

Lo anterior muestra una *profundización de las divisiones al interior del Estado* entre sus distintos aparatos: las instituciones democráticas –fundamentalmente el Congreso–, la burocracia civil y la burocracia militar, cada una empeñada en su política propia y atada a factores de presión diferentes. Los aparatos democráticos están sujetos a las presiones cada vez más desesperadas desde "abajo", por mitigar la situación de extrema y creciente miseria que se padece; la tecnoburocracia civil, ligada directamente a los sectores más fuertes del capital nacional e internacional, cuyos personeros en ocasiones son los mismos, así como su preocupación, que parece consistir exclusivamente en aumentar los niveles de acumulación de capital, y los aparatos militares, sujetos crecientemente a las estrategias del Pentágono.

De esta forma, mientras en México se continúa con la misma política económica, aparecen en el campo político acciones emanadas del Estado aparentemente incongruentes o contradictorias, como señalan organismos de derechos humanos: "En 1997 hemos vivido en México una enorme paradoja: la que significa la ampliación de espacios democráticos formales y el incremento de los índices de represión y violencia política..."<sup>37</sup> Producto de este juego a dos puntas del gobierno es la apertura electoral que se pretende mantener dentro de una función únicamente de legitimidad, junto a la exacerbación en el uso de los métodos represivos por parte de los cuerpos coercitivos del Estado.

En resumen, mientras se profundiza el proceso de globalización integrándose a él los países subdesarrollados, en este caso México, atándose al proyecto transnacional del neoliberalismo y a las estrategias militares promovidas desde Estados Unidos, esta misma integración hacia afuera acentúa la desintegración y fragmentación hacia adentro de la sociedad y del propio Estado.

Un elemento fundamental en la fortaleza de un Estado es el grado de legitimidad que éste encuentra en la sociedad de acuerdo a la credibilidad del gobierno existente. Hoy, la pérdida de la confianza en el partido de gobierno en México acentúa el problema de falta de solidez del Estado. La crisis de éste,

<sup>36</sup> "Militarización" (Informe Especial), en *El Financiero*, México, 28 de diciembre de 1997, p. 36.

<sup>37</sup> *La Jornada*, México, 31 de diciembre de 1997, p. 12.

el Partido Revolucionario Institucional (PRI), es también la crisis del Estado mexicano; pretender compensar esta deficiencia mediante políticas de fuerza sólo agrava el problema.

La incapacidad de generar un crecimiento económico que dé respuesta a las mínimas necesidades populares, la ineficiencia de los aparatos represivos por controlar la creciente criminalidad, la corrupción que avanza sobre todo el Estado, son los síntomas, más allá de la fortaleza que se pretende demostrar en el campo represivo, de la ineficacia y fragilidad de este Estado.

La creciente pérdida de sus bases sociales, paralela al aislamiento cada vez mayor del grupo gobernante, se da no sólo entre las clases más desfavorecidas, obrera y campesina, sino en los demás segmentos sociales perjudicados con las actuales políticas, como los sectores medios y el pequeño y mediano empresario. A esto se suman las luchas internas al interior del propio Estado como, entre otros, el ventilado boicot que los medios de comunicación mencionan –por parte de la Secretaría de Gobernación– a la política presidencial en el caso de Chiapas, las continuas acusaciones mutuas entre la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial en relación a la ineficacia para solucionar los problemas más graves, entre ellos la delincuencia, etcétera.

Y junto a todo ello, la crisis económica. A sus efectos en el área urbana, donde la situación de México se coloca como parte de la crisis general del capitalismo en su eslabón más débil –el Tercer Mundo–, se suma además el eterno problema del sector agrario. Una crisis de grados catastróficos en lo que se refiere a niveles de productividad, volúmenes de producción y atraso tecnológico, acompañada por una situación de miseria extrema del campesinado –sometido a la permanente dominación caciquil que le permite al PRI mantener ilusiones de poder atado al voto de esos sectores, de los más golpeados de la población mexicana–, conforman el nudo de la crisis política que parece insoluble en términos de poder lograr una apertura política en lo que respecta a los Estados del sur del país.

Desarmar la estructura de poder que conforma el grupo de gobernadores de esa región del país parece ser lo único que permitiría inclinar el fiel de la balanza a favor de los sectores políticos menos contaminados, para limpiar al Estado de la camarilla que hoy lo maneja y rearticular una nueva relación entre Estado y sociedad que le devuelva a aquél las bases sociales que constituyen la única fuente de estabilidad institucional y que permitirían equilibrar la relación de fuerzas entre las mayorías sociales y la minoría que concentra el poder económico. De ahí se podría partir para reorientar la política económica hacia un crecimiento que a la necesidad de acumulación de capital integre las necesidades de la población mexicana.